

La impunidad, pesado lastre para el desarrollo

Cuatro hechos recientes vuelven a encender la luz roja sobre un tema que constituye un pesado lastre no solo para la recuperación ética y democrática de la nación, sino para la convivencia social y el desarrollo económico del país: la rampante impunidad.

Un asunto escandaloso es el de los accidentes mortales en edificios. El caso de Miraflores ha traído a colación la tragedia de Gamarra, hace cinco meses, en que murieron 8 trabajadores, a pesar de lo cual los responsables siguen impunes y no se han pagado siquiera las reparaciones. Pero el tema va más allá: de inmediato se ha puesto sobre el tapete la idea de que mejor es volver a controlar y se pretende dejar sin efecto el sistema de licencias automáticas. Ello, en lugar de sancionar severamente a las empresas infractoras para evitar que vuelvan a incurrir en negligencias punibles y accidentes y dar así una señal firme y clara de tolerancia cero contra la impunidad.

Luego, aún sigue en el ojo de la tormenta el escándalo del Banco de Materiales (Banmat), en el que de modo cínico e inescrupuloso algunas autoridades pretenden reducir al mínimo la grave responsabilidad de algunos funcionarios del banco y del Fonafe, que administra el holding de empresas estatales y que no pudo ser ajeno a todas las irregularidades. Pero, en lugar de plan-

tear sanciones y reformas estructurales para evitar el clientelismo, la corrupción y la impunidad, el ministro Enrique Cornejo exculpa al nuevo presidente del Banmat, que duró unos pocos días al conocerse su trayectoria irregular, y deja libre de polvo y paja al Fonafe.

Asimismo, repugna y causa indignación el caso de un oficial de la policía, comisario de Santa Bárbara en Puno, capturado cuando traficaba estupefacientes. Y no solo por su rango de auto-

¿Y con qué autoridad moral y legal podrá sentenciar la Corte Superior de Lima si tiene como titular a un juez tan cuestionado?

ridad, sino porque antes había sido expulsado de la institución por delitos similares, pero fue repuesto por controvertidas decisiones judiciales, avalando la impunidad. ¡Cuántos casos más habrá de presuntos delincuentes con uniforme, por obra y gracia del Poder Judicial!

EL CNM BAJO SOSPECHA DE PARCIALIDAD

Otro caso emblemático está en la controvertida decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuya mayoría se opone a destituir al

suspendido presidente de la Corte Superior de Lima, Ángel Romero. Ello a pesar de las sólidas evidencias que lo involucran en un polémico fallo contra el BCR, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Trabajo y el Tribunal Constitucional habían fallado antes en contra.

Aun con todos estos agravantes, el CNM cambió de parecer sobre Romero, sin explicación ni justificación suficiente. Antes se pronunció por la destitución pero ahora solicita una sanción menor, lo que deja muy mal parada a esta institución y al Poder Judicial.

Recientemente se ha informado que, según reportes de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), de 120 pedidos de destitución el CNM solo ha resuelto 49 casos, principalmente de jueces de primera instancia y de paz, pero no de vocales superiores. A más de eso, un miembro connotado del CNM como Aníbal Torres ha denunciado que la mayoría de la entidad se rige por criterios de amiguismo y favoritismo, lo que repugna cualquier principio de justicia y equidad y promueve la subcultura de la impunidad.

El organismo se pone así bajo graves cargos de parcialidad, lo que causa gravísimo daño al sistema de administración de justicia y a la seguridad jurídica del país. Si el CNM tuerce así los criterios para favorecer a algunos magistrados de alto rango, qué garantías tendrán los jueces de

menor nivel y el resto de ciudadanos. ¿Y con qué autoridad moral y legal podrá sentenciar la Corte Superior de Lima si tiene como titular a un juez tan cuestionado como Romero?

¿QUIÉN DIRIGE LA REFORMA JUDICIAL?

Se trata solo de algunos ejemplos, no los únicos, que ponen en evidencia la prevalencia del cáncer de la impunidad, y que deben merecer la atención de las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo, pero sobre todo del Ministerio Público y del Poder Judicial, a los que primariamente corresponde, en el Estado de derecho, denunciar y castigar los delitos e irregularidades conforme a ley y de modo imparcial.

Como lo hemos dicho antes, ya no se trata tanto de dar leyes, sino de aplicar con firmeza y objetividad las ya existentes, lo que hace más urgente y exigible la postergada reforma judicial, sobre todo para contar con jueces probos y eficientes que luchen contra la impunidad.

Y es que si no hay seguridad jurídica, no habrá tranquilidad, orden ni un ambiente propicio para atraer inversiones y crear empleo y desarrollo.

Por ello, si los jueces no tienen voluntad para reformarse ni para juzgar y sancionar, sería conveniente que la reforma se haga coordinadamente con los otros poderes. Finalmente, el Poder Judicial pertenece a todos los peruanos. ■

LOS 60 AÑOS DE LA CEPAL Y EL RUMBO ECONÓMICO DEL CONTINENTE

Inventar el futuro

Fernando Henrique Cardoso

Ex presidente de Brasil



Fernando Henrique Cardoso es sociólogo y escritor.

Traducido por Jorge L. Gutiérrez.

© 2008 Agencia O' Globo

Distribuido por The New York Times Syndicate

Exclusivo para el diario El Comercio en el Perú

La semana pasada participé en un encuentro en Santiago de Chile para conmemorar los 60 años de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). En esa ocasión, el sociólogo francés Alain Touraine dio una conferencia admirable en la cual revisó la contribución de Raúl Prebisch y sus seguidores al conocimiento de América Latina. Resumió los avances obtenidos en la región en los ámbitos económico, social y político, destacando los progresos habidos en Chile y Brasil gracias, según el conferencista, a la continuidad de las administraciones socialdemócratas.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue el énfasis hecho en la contribución de la Cepal de los años 50 y 60, con las necesarias adaptaciones posteriores, para "inventar a América Latina".

La búsqueda de convergencia de opiniones sobre la forma de acelerar el crecimiento económico y la propia noción de que habría un camino, tal vez un destino común, se convirtieron en ideas rectoras. El debate intelectual y político de la región se organizaba a favor o en contra de ellas. En los días que corren, de globalización económica y fragmentación de intereses, es difícil creer que los caminos de los países siguen siendo convergentes o que sean los mismos. El mismo énfasis en el "desarrollo hacia adentro" necesita ampliarse para tomar en cuenta lo que Touraine subrayó: la perspectiva correcta para entender los procesos en marcha en América Latina no dispensa del marco global.

Es innegable, empero, que la invención del futuro sigue siendo una tarea que incita a desafiar a los intelectuales, políticos y hombres prácticos de cada país. En el caso de Brasil, la economía asumió tales proporciones y se integró tan velozmente al sistema global que las controversias ridículas del pasado desaparecieron de la escena, por lo menos en lo que respecta a las instituciones y a las políticas económicas.

Bastan unos cuantos ejem-



ILUSTRACIÓN VÍCTOR AGUILAR

“Pensar el futuro en los países latinoamericanos sigue siendo una tarea que incita a desafiar a los intelectuales, políticos y hombres prácticos de cada país”

plos: en el área política, nadie percibió que el gobierno de Lula rompió el monopolio de los seguros que era ejercido por el Instituto de Reaseguros de Brasil (IRB). En el gobierno pasado, ese mismo proceso fue obstaculizado por una enorme gritería y una serie de medidas judiciales lanzadas por el Partido de los Trabajadores y sus filiales, que alegaban, con los argumentos más atrasados, que el quiebre de ese monopolio lesionaría el interés nacional.

Pero es expresiva la justa alegría presidencial para conmemorar que una empresa de evaluación de riesgos clasificara al país en el primer grado de la

escala para considerar seguras las inversiones hechas aquí (el "grado de inversión"). En defensa de la empresa evaluadora hay referencias explícitas a que eso se debe a políticas básicas (metas inflacionarias, cambio fluctuante y ley de responsabilidad fiscal) puestas en marcha por el gobierno anterior y continuadas por el actual, después de una transición de mando civilizada y ordenada.

Si en el área económica inventamos un camino que sigue dándole aliento al país y que ha sido ampliado por el gobierno actual, ¿no sería oportuno preguntarnos, en la arremetida hacia el futuro, si no habrá llegado el

momento de buscar convergencias nacionales que nos lleven más pronto a un futuro mejor?

¿Nos contentaremos con ver el mercado financiero vibrante y una economía real que comienza a moverse, si bien todavía contra obstáculos para afirmarse en el marco de la globalización competitiva, pero bloqueados por la falta de cohesión de la sociedad, por la violencia, por la impunidad, por la corrupción, por el descrédito de los partidos y todo lo demás?

La desproporción que existe

“La desproporción que existe entre el mercado y la nación podría ser reducida si hubiera convergencia política”

hoy en día entre el mercado y la nación, e incluso entre la opinión pública (de los que se informan, critican y toman posición) y la opinión nacional (de los que ven mejor su nivel de vida, a despecho de las carencias en la escuela, el hospital, la comisaría, el tribunal y donde más las hubiera), bien podría ser reducida, cuando no superada, si hubiera convergencia política, un cierto consenso en áreas críticas situadas más allá del mercado, fijadas en la vida cotidiana, en la sociedad o en la vida pública, en las instituciones.

Hubo un tiempo en el que la moda era buscarse un "pacto de la Moncloa". La moda de los pactos ya pasó, pero no la necesidad de convergencias básicas en torno de algunas metas que orienten el futuro, aunque no impliquen necesariamente alianzas electorales entre partidos.

Solo para ejemplificar:

¿No sería posible un consenso mínimo en las reglas electorales para evitar que cada nuevo gobierno sea prisionero del "clientelismo de turno", corriendo el riesgo, como ahora, de tomarle el gusto?

¿No sería posible definir una política energética común, tomando en cuenta las posibilidades del etanol y los descubrimientos de considerables reservas de petróleo?

¿No podríamos buscar el consenso sobre el gravamen que sería admisible para las nuevas exploraciones, que no sofoque el

apetito por invertir, sino que asegure recursos para áreas críticas, aun sin la perfección noruega de pensar en el uso para las generaciones futuras de un "fondo de petróleo"?

¿No daría el tema para abrir la discusión nacional sobre las áreas prioritarias en las cuales utilizar las futuras ganancias petroleras (educación, asistencia)?

Y la imperiosa necesidad de aumentar el profesionalismo en las carreras burocráticas, ¿va a continuar postergada, con cada vez más militantes ocupando cargos de confianza?

¿Y hasta cuándo las agencias regulatorias seguirán siendo parte del botín político?

¿No da incluso para tener reglas más claras que organicen las empresas mixtas público-privadas en las obras de infraestructura?

Al mismo tiempo, ¿no puede haber más rapidez en las concesiones de generación de energía?

Finalmente, para que la lista no sea larga: ¿No podría buscarse una coalición en torno de puntos comunes mínimos para la reforma tributaria?

Todo eso requeriría además que se ofreciera un modelo de sociedad futura con algunas garantías individuales básicas: seguridad pública efectiva, acceso a la escolaridad y a la justicia, fin de la impunidad, universalización de la asistencia acabando con las escandalosas desigualdades de remuneración entre las categorías de pensionistas y así sucesivamente. Por no hablar del fin de los abusos cometidos por una capa sindical que usa el dinero público para la promoción propia, sin ningún beneficio para la masa de trabajadores.

Para todo esto es preciso que haya virtud y desprendimiento. No sofoque en su nacimiento, como todavía ahora en Belo Horizonte, ningún entendimiento entre fuerzas del mismo campo, ni alentar maniobras continuistas ni, mucho menos, encubrir prácticas policiales a las que ni siquiera el régimen militar se atrevió a recurrir para desmoralizar a los adversarios.

¿Será que existe alguna brizna de realismo en proponerse que, a pesar de todo, no renunciemos a pensar en grande, a inventar el futuro?

No lo sé, pero con o sin realismo, si no se alienta la esperanza, ¿cómo producir una sociedad cuyos cimientos no se apoyen tan solo en el mercado y la demagogia? ■